



Amparo Indirecto: [REDACTED]

Toca: 315-C-2C01/2023

Expediente: [REDACTED]

Apelante: [REDACTED].
(Demandada incidentista);

Apelante adhesiva: [REDACTED].
[REDACTED]. (Actora incidentista).

Resolución impugnada: Sentencia Interlocutoria de 17 diecisiete de mayo de 2023 dos mil veintitrés, dictada por el Juez Segundo del Ramo Civil del distrito judicial de Tuxtla.

Magistrado ponente: Licenciado Evaristo Barrios Arévalo.

Secretario de Estudio y Cuenta:
Licenciado Jorge Alejandro Ruíz Cruz.

SEGUNDA SALA REGIONAL COLEGIADA EN MATERIA CIVIL, ZONA 01 TUXTLA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.- Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 23 veintitrés de abril de 2024 dos mil veinticuatro.

V I S T O, para dictar **NUEVA RESOLUCIÓN** en lo autos del Toca **315-C-2C01/2023**, formado con motivo al **RECURSO DE APELACIÓN**, interpuesto por la demandada incidentista, así como el **RECURSO DE APELACIÓN ADHESIVA**, interpuesto por la actora incidentista, en contra de la **sentencia interlocutoria de 17 diecisiete de mayo de 2023 dos mil veintitrés**, dictada en el expediente número [REDACTED], por el Juez Segundo del Ramo Civil del distrito judicial

de Tuxtla, en el INCIDENTE DE NULIDAD DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, promovido por [REDACTED], en calidad de albacea definitivo de la Sucesión Intestamentaria del extinto [REDACTED], en contra de [REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED].

RESULTANDO

1. **Resolución objeto de la apelación.** El Juez del conocimiento, dictó la sentencia interlocutoria recurrida, cuyos puntos resolutivos dicen:

---- **PRIMERO.-** Ha procedido el **INCIDENTE DE NULIDAD DE LA JURISDICCIÓN VOLUNTARIA**, promovido por [REDACTED], en su calidad de **albacea Definitivo** de la Sucesión Intestamentaria a bienes del extinto [REDACTED], en contra de [REDACTED], [REDACTED] Y [REDACTED]; en donde la parte actora incidentista acreditó sus pretensiones; en consecuencia.-

---- **SEGUNDO.-** Se **declara la nulidad** de todo el actuado dentro de la jurisdicción voluntaria (información ad perpetuam), promovida por [REDACTED], [REDACTED] Y [REDACTED], tramitada dentro del presente expediente. Dejándose a salvo los derechos de ambas partes, en términos de la parte considerativa de la presente resolución.-

----**TERCERO.-** Se ordena girar oficio al **DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD**, para que proceda a cancelar la inscripción ordenada mediante la sentencia definitiva de fecha 11 once de julio de 2022 dos mil veintidós, en virtud de haber sido declarada la nulidad de todo lo actuado en la jurisdicción voluntaria.-

----**CUARTO.-** Se ordena girar oficio a la Dirección de Catastro del Estado, para que proceda cancelar la traslación del dominio de los inmuebles motivos del litigio, por motivo a la nulidad decretada por esta autoridad.-

----**QUINTO.-** No se hace especial condena en costas en esta instancia.-

----**SEXTO.-** NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

2. **Parte considerativa de la sentencia materia de apelación.**

---- **III.-** Ahora bien, planteado el presente incidente en los términos precisados, a juicio de quien resuelve, estima que el mismo resulta **PROCEDENTE**, por las razones siguientes:-

---- En el caso a estudio, comparece la parte actora incidentista reclamando como prestación principal la nulidad de todo lo actuado en la presente Jurisdicción Voluntaria de Información de Dominio; en virtud que mediante sentencia definitiva de fecha 11 once de julio de 2022 dos mil veintidós, se declaró que los demandados incidentistas [REDACTED] Y [REDACTED], de poseedores se convirtieron en legítimos propietarios por virtud de la prescripción consumada a su favor, por acreditar la posesión de dos

inmuebles, **el primer predio urbano ubicado en** [REDACTED] **de esta Ciudad**, con superficie de 2,782.00 (dos mil setecientos ochenta y dos) metros cuadrados, dentro de las siguientes medidas y colindancias: **AL NORTE:** 38.63 (treinta y ocho metros, sesenta y tres centímetros) y colinda [REDACTED] **AL SUR:** 39.61 (treinta y nueve metros, sesenta y un centímetros) y colinda [REDACTED] **AL ORIENTE:** 72.91 (setenta y dos metros, noventa y un centímetros) y colinda con propiedad privada; **AL PONIENTE,** 72.21 (setenta y dos metros, veintiún centímetros) y colinda con [REDACTED]; **el Segundo Predio ubicado en** [REDACTED] de esta ciudad, con superficie de 621.10 (seiscientos veintiún metros diez centímetros cuadrados), dentro de las siguientes medidas y colindancias: **AI NORTE:** 24.67 (veinticuatro metros, sesenta y siete centímetros) y colinda con propiedad privada; **AL SUR:** 25.00 (veinticinco) metros y colinda [REDACTED] **AL ORIENTE:** 24.86 (veinticuatro metros, ochenta y seis centímetros) y colinda con [REDACTED] y **AL PONIENTE:** 25.07 (veinticinco metros, siete centímetros) y colinda [REDACTED] ambos en esta ciudad. –

---- Bajo esa premisa, es preciso señalar que el artículo 7 del Código Civil del Estado, establece que los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público, serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario; ello en virtud que resultaría ilógico que quedasen firmes y con autoridad de cosa juzgada los actos que se ejecuten por particulares contra el tenor de las leyes prohibitivas en perjuicio de terceros; ya que las partes de un acto jurídico tienen la obligación de mantener su voluntad dentro de los límites de la licitud y del interés público. El orden jurídico prohíbe o permite ciertas conductas humanas en tanto perturban o no la convivencia en sociedad, por lo que cuando se realizan actos que contravienen las normas prohibitivas o de interés público, estos son sancionados y por ende no deben producir efectos jurídicos al estar afectados de nulidad.-

---- Además que, además que, de conformidad con el artículo 93 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, **jurisdicción voluntaria** y las demás que prevengan las leyes, pueden alterarse o modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente; es decir, la sentencia puede llegar a ser cosa juzgada material, esto es inmutable, sin embargo, la ley misma determina que en ciertos supuesto no puede alcanzar el rango o categoría de cosa juzgada material, como es el caso de la jurisdicción voluntaria de información de dominio, que pueden alterarse en cambiando las circunstancias que afectan el derecho de los interesados; de ahí que, la persona que se dice afectada, debe demostrar exclusivamente el hecho en que funda lo fraudulento del proceso.-

---- En esa tesitura, se advierte que la actora incidentista para acreditar los hechos fraudulentos que aduce; exhibió original del primer testimonio de la Escritura Pública número [REDACTED], de fecha 6 seis de abril de 2005 dos mil cinco, pasada ante la fe del Licenciado [REDACTED], Notario Adjunto de la Notaría Pública [REDACTED], cuyo titular es el Licenciado [REDACTED], en el que consta la Escritura de Adjudicación de Bienes de los extintos [REDACTED], a favor del señor [REDACTED], como único y universal heredero y albacea; del que se desprende que en el apartado correspondiente a las CLAUSULAS, se plasmó lo siguiente: "...**PRIMERA.-** El señor [REDACTED], en su calidad de Ejecutor Intestamentario, Albacea y Único y Universal Heredero se adjudica para SI el Cien por ciento de los predios que a continuación se especifica, con todas sus entradas, usos, costumbres, servidumbres y acciones en el estado que se encuentran, sin reserva ni limitación alguna. C).- Fracción de Terreno Urbano ubicado en [REDACTED], con las medidas y colindancias siguientes: Al Oriente.- Ciento veintisiete metros y propiedad del señor [REDACTED] Al Poniente.- Mide de la primera línea, [REDACTED] noventa metros cuarenta y cinco centímetros, y propiedad de la misma compradora [REDACTED], [REDACTED] la Segunda Línea, Dieciséis metros cincuenta centímetros y terreno del señor [REDACTED] y la tercera línea, treinta

y ocho metros y solar del mismo [REDACTED] Al Norte.- Quince metros diez centímetros y propiedad del señor [REDACTED] y; Al Sur.- Cuarenta metros y propiedad del señor [REDACTED]. Que del predio antes descrito hoy será objeto de adjudicación una fracción, ubicado en [REDACTED], con una superficie de dos mil setecientos ochenta y dos metros cero tres centímetros, con las medidas y colindancias siguientes: Al Norte.- Treinta y siete metros cincuenta centímetros, [REDACTED]. Al Sur.- Treinta y ocho metros setenta y nueve centímetros [REDACTED]. Al Oriente.- Setenta y dos metros ochenta y siete centímetros con [REDACTED], y predios cuatro mil novecientos once y dieciséis. Al Poniente.- Cinco líneas, La Primera mide veinticuatro metros ochenta y cinco centímetros, La Segunda ochenta centímetros, La Tercera mide trece metros cuarenta y cinco centímetros, La cuarta mide veinte centímetros y La quinta mide treinta y cuatro metros cincuenta y siete centímetros con [REDACTED] y [REDACTED]. D) Fracción de Terreno Urbano ubicado es [REDACTED]

[REDACTED], con una superficie de seiscientos cincuenta metros cuadrados, mide y colinda. Al Norte.- Veinticinco metros, [REDACTED] Al Sur.- veinticinco metros, con el señor [REDACTED]; Al Oriente.- Veintiséis metros, y con la señora [REDACTED] antes del mismo [REDACTED] y Al Poniente.- Veintiséis metros, y con el señor [REDACTED] calle de por medio. **SEGUNDA.-** El señor [REDACTED], como Ejecutor Intestamentario, Albacea y Único y Universal Heredero, pasa a ser propietario Absoluto del cien por ciento de los Bienes Inmuebles descritos en la Cláusula Primera...”.-

---- Documental pública la anterior, que tiene valor probatorio pleno en términos del artículo 398 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado; a través del cual la actora incidentista acredita que los bienes inmuebles antes descritos resultan ser los mismos que fueron motivo de las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam, que concluyó con la sentencia definitiva de 11 once de julio de 2022 dos mil veintidós, a través de la cual se declaró que [REDACTED], [REDACTED] Y [REDACTED], hoy demandados en el presente incidente, de poseedores se convirtieron en propietarios de los citados inmuebles, por virtud de la prescripción consumada a su favor; pues si bien es cierto, de la documental antes valorada se advierte que las medidas y colindancias de ambos predios, contienen algunas variaciones, únicamente lo es en relación con las características asentadas en la sentencia definitiva; sin embargo, dichos predios pueden ser plenamente identificados, por ser los mismos que reclama la actora y que pertenecen a la masa hereditaria de la Sucesión Intestamentaria del extinto [REDACTED]; en virtud a que los mismos son coincidentes en cuanto a las calles, sus nomenclaturas, y superficie, tal y como se demuestra con los certificados de libertad o gravamen, de fechas 24 veinticuatro y 25 veinticinco de enero del presente año, expedidos por el Delegado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, que en originales fueron exhibidos, mismos que adquieren valor probatorio en términos del numeral 389 del Código Procesal Civil del Estado; por lo que no queda duda que los bienes inmuebles que refiere la actora incidentista en su demanda se trata de los mismos bienes que fueron motivo de la jurisdicción voluntaria (información ad perpetuam) que hoy se pretende nulificar. –

---- Por otra parte, la accionante, para justificar la afectación que en su esfera jurídica le causa a la sucesión intestamentaria que representa en su calidad de albacea la sentencia definitiva de fecha 11 once de julio de 2022 dos mil veintidós, por ello, exhibió copia certificada del instrumento público número [REDACTED] de fecha 8 ocho de julio de 2017 dos mil diecisiete, pasada ante la fe del Licenciado [REDACTED], Titular de la Notaría Pública [REDACTED], en la que consta la radicación del Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del extinto [REDACTED], teniéndose como herederos a los señores [REDACTED], de donde se desprende que se designó como albacea de la sucesión intestamentaria a la hoy actora incidentista; por consiguiente, a través del citado documento, ésta acredita su legitimación para promover el presente

incidente, como representante de la masa hereditaria, pues a ella es a quien le corresponde velar y administrar la misma; de ahí que, con el documento exhibido justifica fehacientemente el interés jurídico para comparecer a juicio y ejercitar la presente acción de nulidad de todo lo actuado en la presente jurisdicción voluntaria que se resolvió en el expediente principal [REDACTED]. –

---- Así pues, se colige que con las pruebas aportadas por la actora incidentista, se acredita fehacientemente que dentro del juicio de jurisdicción voluntaria (información ad perpetuam), tramitada ante esta autoridad, dentro de la cual se emitió la sentencia definitiva de fecha 11 once de julio de 2022 dos mil veintidós, declarándose en la misma que los hoy demandados incidentistas [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] Y [REDACTED], de poseedores se convirtieron en legítimos propietarios por virtud de la prescripción consumada a su favor, al haber acreditado la posesión de los inmuebles antes descritos; pues quedó demostrado la existencia de hechos fraudulentos, al haber exhibido en ese juicio para acreditar su acción un contrato de donación pura y simple de fecha 3 tres de enero de 2016 dos mil dieciséis, celebrado entre [REDACTED], en su calidad de Donante; y [REDACTED], Y [REDACTED], como Donatarios; así como los certificados de no inscripción de fechas 17 diecisiete de enero y 4 cuatro de febrero de 2022 dos mil veintidós, de los que se desprende que el Delegado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta Ciudad, informó que no se había encontrado registro alguno a favor de persona física o moral; por lo que, se deduce, que dicho proceso a través del cual se les declaró propietarios a los hoy demandados de los bienes inmuebles motivo de la litis, estuvo viciado, ya que existe certeza jurídica que los bienes motivo de la litis, si cuentan con un registro y antecedente, pues tienen propietario, y la acción a ejercitar por los demandados, para que de acreditarlo fueran declarados propietarios lo es en la vía civil y no en una Jurisdicción Voluntaria; y con el resultado del mismo, se causaron perjuicios a terceras personas, como en el presente caso resulta ser la hoy actora incidentista y la sucesión intestamentaria que representa; quien al no haber sido parte en el asunto principal no tuvo la oportunidad de hacer valer los derechos que como representante de la sucesión intestamentaria de su progenitor le correspondía, ni oponerse en su momento a la tramitación de ese juicio viciado; por ende, al haber acreditado con las pruebas aportadas el derecho que le asiste como albacea sobre los bienes inmuebles motivo del litigio, no puede considerarse válido el procedimiento que se desarrolló en aquél juicio ni la sentencia que otorgó el derecho de propiedad de los referidos predios a los hoy demandados incidentistas, pues como se dijo el mismo fue declarado a través de un proceso fraudulento cuyo efecto es que se decreta su nulidad. –

---- Apoya lo anterior, la tesis aislada XI.C.11 C (10a.), en materia Civil, registro digital: 2003457, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Décima Época; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, página 1694; que señala: -

ACCIÓN DE NULIDAD POR FRAUDE. PROCEDE EN TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA YA CONCLUIDAS, AUN CUANDO NO ESTÁ REGLAMENTADA ESPECÍFICAMENTE EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN. Aun cuando la acción de nulidad por fraude en el procedimiento de diligencias de jurisdicción voluntaria ya concluidas, no está reglamentada específicamente en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, a falta de disposición expresa es dable aplicar la regla general contenida en los artículos 32 del citado ordenamiento y 8o., 1389 y 1395 del Código Civil para el Estado, los cuales establecen que la acción procede en juicio aun cuando no se exprese su nombre, con tal de que se determine con claridad cuál es la clase de prestación exigida al demandado y el título o causa de la acción, así como el que los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público, serán nulos, máxime que así lo permite el precepto 12 del propio código sustantivo civil, al señalar que a falta de ley expresa aplicable al caso, la controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y no a favor del que pretenda obtener lucro. Además, la acción de nulidad de "juicio concluido" debe entenderse referida a todo procedimiento judicial y no necesariamente a aquel en el que se dirima una controversia entre

partes, dado que tanto uno como otro son susceptibles de tramitarse en forma fraudulenta y, como ya se indicó, el citado artículo 8o. establece que "los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público, serán nulos"; de ahí que el juzgador no debe hacer distinción donde la ley no la hace. –

---- **IV.-** En esas condiciones, se declara **PROCEDENTE** la acción incidental intentada, y como consecuencia de ello, **se declara la nulidad** de todo el actuado dentro de la jurisdicción voluntaria (información ad perpetuam), promovida por [REDACTED], [REDACTED] Y [REDACTED], tramitada dentro del presente expediente.-

---- Ahora bien, tomando en consideración que el Contrato de Donación de fecha 3 tres de enero de 2016 dos mil dieciséis, que fue el documento base de la acción presentado por la actora dentro del juicio principal de jurisdicción voluntaria, no ha sido declarado nulo; y la actora incidentista por su parte, para acreditar la propiedad de los bienes inmuebles motivo de la litis, exhibió el instrumento notarial número [REDACTED], de fecha 6 seis de abril de 2005 dos mil cinco, pasada ante la fe del Licenciado [REDACTED], Notario Adjunto de la Notaría Pública [REDACTED], cuyo titular es el Licenciado [REDACTED], en el que consta la Escritura de Adjudicación de Bienes de los extintos [REDACTED], a favor del señor [REDACTED], como único y universal heredero y albacea, del cual resulta ser albacea; en ese contexto, se dejan a salvo los derechos de ambas partes, para que si a sus intereses conviene los hagan valer en la vía y forma que legalmente corresponda.-

---- En consecuencia, se ordena girar oficio al **DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DE ESTA CIUDAD**, para que proceda cancelar la inscripción ordenada mediante la sentencia definitiva de fecha 11 once de julio de 2022 dos mil veintidós, en virtud de haber sido declarada la nulidad de todo lo actuado en la jurisdicción voluntaria.-

---- Asimismo, se ordena girar oficio a la Dirección de Catastro del Estado para que proceda cancelar la traslación de dominio de los inmuebles motivos del litigio, por motivo a la nulidad decretada por esta autoridad.-

---- Por cuanto que no se actualiza ninguna de las hipótesis contenidas en el artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, no se hace especial condena de costas en esta instancia.

3. Interposición del recurso de apelación. Inconformes

[REDACTED] y como apelante adhesiva [REDACTED], con la sentencia interlocutoria de mérito, interpusieron recurso de apelación ante el Juzgado del conocimiento; en su oportunidad se remitió el expediente original número [REDACTED], a esta Sala, para la substanciación del recurso hecho valer.

4. Radicación del recurso y citación para sentencia.

Mediante auto de 3 tres de julio de 2023 dos mil veintitrés, se radicó la segunda instancia, se declaró legalmente admitido el recurso en **ambos efectos** y se tuvo por oportunamente expresados los agravios formulados por [REDACTED] (**demandada incidentista**), mismos que fueron contestados por la contraria; de igual forma se

tiene por expresado los disensos de la apelación adhesiva interpuesto por [REDACTED] (**actora incidentista**); mismos que fueron contestados por el licenciado [REDACTED], abogado patrono de la parte demandada.- Se dejó de citar para sentencia hasta en tanto señalaran domicilio para oír y recibir notificaciones. Por auto de 11 once de julio del año en curso, se citó a las partes para oír sentencia.

5. Nueva integración de la Sala. En términos del oficio número SECJ/2630/2023, de 01 uno de agosto de 2023 dos mil veintitrés, signado por la Maestra Patricia Recinos Hernández, Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en el que comunicó que con fundamento en el artículo 53 del Código de Organización del Poder Judicial del Estado, acordó que el Licenciado Juan José Pérez Gutiérrez, Secretario de Estudio y Cuenta, adscrito a la Ponencia “B” de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, sea quien realice las funciones de Secretario General de Acuerdos por Ministerio de Ley de la referida Sala, a partir del día 01 uno de agosto del año en curso y hasta en tanto abarquen las incapacidades médicas expedida al Licenciado José Manuel Hernández Rodríguez. Por lo que de acuerdo a los artículos 74 párrafo Primero y Séptimo fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 138 fracción I, V y X del Código de Organización del Poder Judicial del Estado, esta Sala queda integrado de la siguiente manera: Licenciado y, Licenciado JUAN JOSÉ PÉREZ GUTIÉRREZ, Secretario de Estudio y Cuenta, en funciones de Secretario General de Acuerdos EFRÉN ANTONIO MENESES ESPINOSA, Magistrado Presidente y Titular de la ponencia “B”, licenciado EVARISTO BARRIOS ARÉVALO, titular de la ponencia “C”, Licenciada VANESSA CASTAÑÓN MONTERO, Secretaria General de Acuerdos en funciones de Magistrada por

Ministerio de Ley, de la Ponencia “A”, por Ministerio de Ley. Lo anterior, para los efectos legales a que hubiere lugar.

6. No conforme con dicha resolución, [REDACTED], interpuso juicio de amparo indirecto ante el órgano de control constitucional, mismo que por razón de turno tocó conocer al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, bajo el **amparo indirecto** [REDACTED], quien mediante **ejecutoria de 26 veintiséis de febrero de 2024 dos mil veinticuatro**, resolvió **conceder el amparo y protección** a la Quejosa, para el efecto de que ésta Sala realice lo siguiente:

1. Dejar insubsistente la sentencia de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, dictada en el toca de apelación 315-C-2C01/2023;

3. En su lugar, emita una nueva determinación en la que siguiendo los lineamientos expuestos en esta resolución determine que no es procedente la vía incidental de nulidad.

7. Las consideraciones que sustentan la referida ejecutoria de amparo, son las siguientes:

“...Sexto. Estudio de los conceptos de violación. La quejosa señala que la Sala responsable indebidamente fundo y motivo la sentencia que constituye el acto reclamado, lo anterior, pues resulta incorrecto sostener que la sentencia dictada en un procedimiento de jurisdicción voluntaria al no causar ejecutoria es procedente alterarlas o modificarlas en vía incidental dentro del mismo procedimiento y no en juicio autónomo.

Manifiesta que el asunto del cual emana el acto reclamado no deriva de una jurisdicción voluntaria genérica, sino a la información ad perpetuam que es de tramitación especial, por lo que debió fundar su determinación en los artículos que establecen la tramitación de las diligencias de información de dominio o ad perpetuam prevista en el artículo 880 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, el cual establece que el incidente de oposición presentado después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria deberá desecharse.

Por tanto, la vía correcta para plantear la oposición después de concluido el acto de la jurisdicción voluntaria, debe ser la vía contenciosa que corresponda, es decir, el juicio autónomo correspondiente y no la vía incidental dentro del procedimiento como sucedió en el asunto.

Bajo ese tenor, este juzgador advierte que los conceptos de violación hechos valer en contra de la sentencia que constituye el acto reclamado son fundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Lo anterior es así, toda vez que la resolución que constituye el acto reclamado confirmó la sentencia interlocutoria que resolvió el incidente de nulidad promovido por [REDACTED], en calidad de albacea de la sucesión de [REDACTED], en las diligencias de información ad perpetuam, pues sostuvo que dichas diligencias al no adquirir ejecutoriedad conforme al artículo 93 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, son susceptibles de alteración o modificación, en razón de que no adquieren firmeza al no dirimir una controversia, esto, son fundamento en los diversos 881 y 884 del citado código, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 93...”

Artículo 881...”

Artículo 884...”

De ahí lo fundado de los conceptos esgrimidos por la quejosa, pues contrario a lo sustentado por la sala responsable, el juicio de nulidad promovido por la inconforme [REDACTED], en calidad de albacea de la sucesión de [REDACTED], resultaba improcedente, lo anterior, pues su pretensión principal lo adujo en dicho incidente era nulificar todo lo actuado en las diligencias y así lograr la revocación de la sentencia dicta el once de julio de dos mil veintidós.

Ahora bien, resulta necesario precisar que las informaciones ad perpetuam sólo tienen por objeto acreditar o justificar un derecho en el que no tiene más interés sino la persona que promueve, y por su carácter de actuaciones de jurisdicción voluntaria no pueden tener valor probatorio en cuanto a la posesión, ni como instrumento público, ni como información testimonial; esto, porque su protocolización sólo implica la autenticidad de la información en cuanto a existencia, pero no en lo que respecta a su fondo; de ahí que, sólo deben estimarse como una presunción cuando están debida y oportunamente protocolizadas y registradas.

Lo que lleva a concluir que la información ad perpetuam podrá decretarse cuando únicamente tenga interés el promovente; es decir, es un procedimiento que por su naturaleza jurisdicción voluntaria no resuelve controversias entre partes, ya que el órgano jurisdiccional interviene sólo a solicitud del interesado, por tanto, la resolución que las aprueba no dirime conflicto alguno, en consecuencia, no produce los efectos de cosa juzgada, como bien sustentó la autoridad responsable.

Sin embargo, contrario a lo manifestado por la responsable el caso que nos ocupa no encuadra en el ordinal 93 del citado código, que si bien, prevé que las resoluciones dictadas en la jurisdicción voluntaria pueden modificarse y alterarse, lo cierto es que señala que esto puede suceder siempre y cuando cambien las circunstancias que afecten al ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente, situación que no aconteció en el asunto, pues a la fecha en que se dicta esta sentencia constitucional no se conoce la tramitación del juicio correspondiente.

De igual forma la responsable, de forma incorrecta sustenta que resulta procedente nulificar las diligencias realizadas con fundamento en el diverso 881 de la legislación citada, sin embargo, dicho precepto señala que se pueden variar o modificar las providencias que se dicten respecto de la jurisdicción contenciosa, lo cual no encuadra en el supuesto, pues como se dijo el acto reclamado deriva de las diligencias de jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam las cuales se tramitan sin audiencia de contraparte, lo que las hace no contenciosas. Lo que evidencia una indebida fundamentación y motivación en el acto reclamado, pues los

preceptos normativos invocados por la responsable para sostener su determinación, no son aplicables al caso, máxime que el artículo 880 del Código de Procedimientos invocado, determina que deben desecharse las oposiciones presentadas después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, reservando el derecho de opositor.

Esencialmente porque la autoridad que conoció de dichas diligencias no esta vinculada a tramitar dicha impugnación, pues considerarlo así implicaría consentir que procede oponer excepciones y defensas en relación a estas, lo que atentaría en contra de la naturaleza de la información ad perpetuam, pues no se trata de un proceso en el que se dilucide la postura de parte actora y demandada, sino de un tramite cuyo único objeto es exteriorizar en forma solemne un derecho a la petición del interesado.

Por tanto, el inconforme al no haber tenido intervención, ni habiendo sido parte en éstas, ya que se sustancian en vía de jurisdicción voluntaria con la sola intervención de la promovente, es claro que su nulidad puede intentarse bien sea como acción o bien, como excepción en un procedimiento contencioso autónomo, sin que jamás pueda tenerse por consentido un acto procesal por una persona que no fue parte en el procedimiento y menos respecto de informaciones ad perpetuam que siempre se reciben y deciden sin perjuicio de terceros, pero no como un incidente procesal de nulidad de actuaciones.

Por las consideraciones vertidas, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal, para los efectos que continuación se precisan...”

8. Nueva integración de Sala. Por auto de 03 tres de abril de 2024 dos mil veinticuatro, se hizo del conocimiento a las partes del oficio SECJ/AP/2545/2024, de 21 veintiuno de marzo del año en curso, suscrito por la maestra Patricia Recinos Hernández, Secretaria Ejecutiva del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, en el que comunicó que en Sesión Ordinaria de Pleno celebrada el 21 veintiuno del mes próximo pasado, acordó aceptar la reincorporación del licenciado Evaristo Barrios Arévalo, como Magistrado Titular de la Ponencia “C” de ésta Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, a partir del 23 veintitrés de marzo del presente año; en consecuencia, ésta Sala queda integrada de la siguiente manera: Maestra **MARÍA ELENA FAVIEL BARRIOS**, Magistrada Presidente, titular de la Ponencia “A”; Licenciado **EFRÉN ANTONIO MENESES ESPINOSA**, Magistrado titular de la Ponencia “B”; Licenciado **EVARISTO BARRIOS ARÉVALO**, Magistrado titular de la Ponencia “C” y Licenciada **VANESSA CASTAÑÓN MONTERO**,

Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, tórnese los autos al Magistrado ponente, para su resolución correspondiente.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Competencia. Esta Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es competente para conocer y resolver el recurso de apelación interpuesto, con fundamento con el artículo 59 del Código de Organización del Poder Judicial del Estado.

SEGUNDO. En cumplimiento a la ejecutoria de **26 veintiséis de febrero de 2024 dos mil veinticuatro**, pronunciada por el Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en el juicio de Amparo Indirecto [REDACTED], promovido contra actos de esta Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, **SE DEJA INSUBSISTENTE Y SIN VALOR ALGUNO**, la resolución de **24 VEINTICUATRO DE AGOSTO DE 2023 DOS MIL VEINTITRÉS**, emitida por esta Alzada, en el **TOCA 315-C-2C01/2023**, formado con motivo al **RECURSO DE APELACIÓN**, interpuesto por la demandada incidentista, así como el **RECURSO DE APELACIÓN ADHESIVA**, interpuesto por la actora incidentista, en contra de la **sentencia interlocutoria de 17 diecisiete de mayo de 2023 dos mil veintitrés**, dictada en el expediente número [REDACTED], por el Juez Segundo del Ramo Civil del distrito judicial de Tuxtla, en el INCIDENTE DE NULIDAD DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, promovido por [REDACTED], en calidad de albacea definitivo de la Sucesión Intestamentaria del extinto [REDACTED], en contra de [REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED], y en su lugar se emite una **NUEVA** conforme los lineamientos dados en dicha ejecutoria.

Sobre el particular, es importante soslayar que el juez a quo, reconoce expresamente que el incidente de oposición únicamente puede ventilarse antes de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, por lo que a ningún fin práctico llevaría controvertir tal extremo, ello en razón que nuestro interés se centrará en evidenciar lo ilegal del criterio del juez en cuanto a que en un juicio de jurisdicción ad perpetuam, que ha sido resuelto mediante

sentencia ejecutoriada, puede ser revocada y nulificada mediante la interposición de un **incidente de nulidad de actuaciones por actos fraudulentos**.

Como se apuntó con antelación, sostener que una sentencia que resolvió una controversia principal, puede ser revocada por la tramitación de un incidente aún y cuando se invoquen actos fraudulentos, viola el principio de cosa juzgada.

Así se advierte de la tesis visible en la página 516 del Tomo XXXIII, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que dice:

COSA JUZGADA, AUTORIDAD DE LA...”

La figura jurídica de nulidad de actuaciones tiene por finalidad que las actuaciones judiciales puedan ser revisadas y, en su caso, modificadas o revocadas, por existir en ellas un vicio cuya corrección legal procede, de suerte que el proceso sea debidamente rectificado antes de que sea resuelto.

Sus alcances han sido fijados en el siguiente criterio:

NULIDAD DE PROCEDIMIENTOS O DE ACTUACIÓN...”

Y por lo que hace a las actuaciones judiciales, han sido definidas por el siguiente criterio:

NULIDAD DE ACTUACIONES, NOCIÓN DE...”

Por regla general, la nulidad de actuaciones se presenta contra actos emitidos antes de pronunciarse sentencia, debiéndose, por tanto, resolver antes de dictarse dicha resolución, a efecto de que el juzgador resuelva la cuestión efectivamente planteada.

Ahora bien, lo anterior no implica que la nulidad de actuaciones sólo pueda promoverse contra actos procesales anteriores a la sentencia, toda vez que con posterioridad a ésta también se presenta la necesidad de que la autoridad judicial actúe y en caso de estimarse que se presenta una violación en tal actuación, puede presentarse el incidente relativo.

Es decir, que la nulidad de actuaciones contra actos dictados antes de pronunciarse sentencia debe plantearse y resolverse con anterioridad a la emisión de tal resolución, lo cual no excluye que respecto de las actuaciones practicadas con posterioridad se sustancie el incidente en cuestión.

Al respecto, es aplicable el siguiente criterio:

NULIDAD DE ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO...”

Bajo esa línea de pensamiento, el incidente de nulidad de actuaciones, únicamente procede después de haberse dictado la sentencia, si la pretensión es dejar sin efectos actuaciones judiciales emitidas con posterioridad a aquella, pero nunca si la finalidad es dejar sin efecto todo lo actuado en el juicio, incluida la sentencia misma que lo resolvió, sin importar la causa legal que se invoque, como en el particular, que el juez a quo pretende invocar actos fraudulentos para dejar sin efecto su propia resolución, como se dijo tal decisión transgrede el principio de cosas juzgadas, ello es así toda vez que en todo caso el actor incidentista tiene a su disposición los medios de defensa que al efecto prevén las leyes, como el **juicio de nulidad, la acción reivindicatoria, incluso el juicio de amparo indirecto o incluso la acción de nulidad de juicio concluido por actos fraudulentos**, que se tramita como juicio autónomo y no en sede incidental, porque **no puede destruirse la firmeza que ha adquirido el juicio a través de un simple incidente de naturaleza accesorial al pleito principal**.

Cobra aplicación la siguiente tesis de jurisprudencia:

NULIDAD DE NOTIFICACIONES, INCIDENTE DE. NO PROCEDE CONTRA ACTUACIONES PRACTICADAS CON ANTERIORIDAD AL DICTADO DE LA SENTENCIA EJECUTORIA...”

Por las anteriores consideraciones, se colige que el juez a quo inventó el incidente de nulidad de actuaciones por actos fraudulentos, puesto que el mismo no encuentra sustento en ningún artículo del Código de Procedimientos Civiles para Estado de Chiapas, ni en criterio jurisprudencial alguno, trastocando con las garantías de debida fundamentación y motivación previsto por los artículos 14 y 16 constitucionales, sin que sea óbice que el juez primigenio hubiera invocado indirectamente el **principio de mayor beneficio**, consagrado en el artículo 17 constitucional, toda vez que en efecto existe la acción de nulidad de juicio concluido por actos fraudulentos, pero el mismo debe ser ventilado a través de juicio autónomo y no de en la vía incidental, en aras de tutelar el principio de seguridad jurídica de mayor entidad que aquel, puesto que la obligación a cargo de las autoridades jurisdiccionales de privilegiar la solución de fondo de las controversias judiciales sobre los formalismos procedimentales no es irrestricto sino que está condicionado a que en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, no se afecte con su aplicación la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos. Por tanto, con la tramitación de un juicio en la vía incorrecta se transgrede el derecho a la seguridad jurídica y, no se cumplen los requisitos constitucionales para obviar dicha violación procesal con base en ese principio, de ahí que sea ilegal e improcedente declarar fundado el incidente de nulidad de actuaciones por actos fraudulentos, sostenido por el juez a quo.

Bajo esa guisa, el juez natural debió declarar fundada la excepción de improcedencia de la vía, opuesta por la suscrita en el escrito de contestación de demanda incidental, y dejar a salvo los derechos del actor incidentista, toda vez que contrario a lo sostenido por el juez primigenio no es constitucionalmente válido aceptar que pueda obviarse la tramitación de un juicio en la vía correcta, so pretexto de fallar de fondo la Litis, ya que no se satisfacen las exigencias constitucionales para ello, pues uno de los requisitos que el artículo 17 constitucional establece para que los juzgadores puedan privilegiar la solución del fondo de la controversia, es que con éstas no se haya transgredido algún otro derecho sustantivo de las partes y con el trámite en la vía incorrecta de un litigio se transgrede el derecho a la seguridad jurídica, a más que como se seguirá insistiendo, el incidentista debió iniciar en todo caso juicio autónomo de nulidad de juicio concluido por actos fraudulentos, la acción reivindicatoria, o bien el juicio de amparo indirecto y no pretender en vía incidental dejar sin efectos una sentencia que había causado ejecutoria.

Resulta aplicable la siguiente jurisprudencia:

RINCIPIO DE PRIVILEGIO DEL FONDO SOBRE LA FORMA LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EN LA VÍA INCORRECTA NO ES UN MERO FORMALISMO QUE PUEDA OBIVIARSE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO TERCERO. CONSTITUCIONAL)...

SEGUNDO.- Me causa agravio la resolución combatida, en la cual el juez a quo sostuvo toralmente que la actora incidentista acreditó los elementos de la acción de nulidad por actos fraudulentos.

Lo anterior es ilegal e infundado por las siguientes consideraciones.

Sin perjuicio, que sostenemos categóricamente que no existe sustento legal alguno para declarar la existencia del incidente de nulidad de actuaciones por actos fraudulentos, estimamos que para los efectos de demostrar lo ilegal del criterio del juez de instancia y SUPONIENDO SIN CONCEDER, el actor incidental no acreditó los elementos de la acción de nulidad de juicio concluido por actos fraudulentos.

En efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, en materia civil, la procedencia de la acción de nulidad de juicio concluido, pero única y exclusivamente de manera excepcional, limitándola sólo a aquellos casos en que la transgresión ocurre por fraude procesal, concretizado éste a través de actos de tal magnitud que resultan sumamente reprobables para el derecho y contrarios al más elemental sentido de justicia, hasta el extremo de permitir una excepción a la regla de la inmutabilidad de la cosa juzgada, como ejemplo de ellos se reconoce la donación entre cónyuges, o la simulación como instrumento para defraudar a los acreedores, en los que se recurre a artificios para hacer pasar por existente un acto que no es real o a la inversa; de ahí que no es posible tramitar en la vía de acción de nulidad de juicio concluido la afectación del derecho a un debido proceso o garantía de audiencia por causas distintas al fraude procesal.

Sin embargo, al no existir en el Código Civil y el Código de Procedimientos Civiles ambos para el Estado de Chiapas, ni el Código Civil Federal, una norma precisa sobre tal figura jurídica, debe entonces valorarse esa extrema y delicada situación en cada caso concreto, para prevenir el riesgo de abuso de dicha acción, a fin de no alterar la seguridad del proceso y abrir la puerta a pleitos inacabables, haciéndose mal uso de ella, bajo el pretexto de superar la discusión respecto de la prioridad entre dos valores fundamentales: la seguridad jurídica y la justicia.

Ahora bien, cuando la acción de nulidad e juicio concluido se pretende fundar en la simple opinión subjetiva del actor de un acto fraudulento, le corresponde la carga de probarlo en términos del artículo 289 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, pues no basta la simple manifestación en el sentido que se cometió un acto fraudulento en el procedimiento de jurisdicción voluntaria, para tenerlo por demostrado, peor aún si el juez en base a una mera manifestación subjetiva del actor lo llega a tener por acreditado.

Como se apuntó en el agravio primero del presente recurso, la única vez que el actor incidental menciona la palabra fraudulento, es justamente en el hecho sexto de la demanda, al referir que los inmuebles en controversia no carecen de registro, como “fraudulentamente” se hizo contar”, sin mencionar a quien le atribuía dicho acto, resultando harto evidente que el juez a quo se subsumió en la carga del actor de acreditar plenamente en que consistía el fraude procesal invocado y no la simple opinión en dicho sentido.

Lo anterior es así, porque la suscrita realizó la búsqueda ante la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, de los inmuebles que se pretendían regularizar en vía judicial, puesto que mi abuelo el C. [REDACTED] (quien interpuso el incidente pero por conducto de su albacea) y mi madre [REDACTED], habían fallecido de la cual mediante los Certificados de No Inscripción, firmado por el Delegado de la Oficina Registral de Tuxtla, se informó que los mismos, no se encontraron inscritos a nombre de persona alguna, de ahí que el inicio de la jurisdicción voluntaria obedeció al informe proporcionado por el propio Registro Público, porque de haber resultado que los bienes si tenían propietario registral, se hubiese intentado juicio de prescripción positiva, de ahí que nada fraudulento hubo en la tramitación del juicio, máxime que se siguieron los actos procesales que al efecto prevé la ley sustantiva y adjetiva civil, esto se efectuaron las publicaciones en el periódico de mayor circulación y se dio intervención al Ayuntamiento Municipal, así como al agente del ministerio público.

En consecuencia, podrán advertir honorables magistrados que el juicio de jurisdicción voluntaria se llevó a cabo en términos de lo dispuesto por la legislación procesal civil vigente en la entidad, de ahí que lo manifestado

por el actor incidental que se procedió fraudulentamente por aducir falta de registro de los inmuebles a usucapir, es una expresión subjetiva y dogmática, porque en todo caso, existió yerro por parte de la oficina registral en expedir incorrectamente los certificados de no inscripción, empero tal error no puede ser de ninguna forma atribuible a la suscrita, que siempre se condujo con buena fe.

Sin perjuicio de lo anterior, el actor incidentista no acreditó con ningún medio de prueba, lo fraudulento del procedimiento, que indebidamente adujo el juez de la causa, por ello se insiste que bastó la sola manifestación de fraude por parte del actor para que el juez primigenio, reencausara el incidente de nulidad de actuaciones y de oposición, en el diverso incidente de nulidad de actuaciones por actos fraudulentos.

Cobra aplicación la siguiente tesis de jurisprudencia...

NULIDAD D E JUICIO CONCLUÍDO, EN QUE CONSISTE LA ACCIÓN DE Y DISPOSICIÓN LEGAL DE LA CUAL DERIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO)...

TERCERO.- *Me causa agravio la Sentencia Interlocutoria de fecha 17 de mayo del presente año, toda vez que, es improcedente la nulidad de actuaciones por la vía incidental, por lo que la presente resolución es ilegal e infundado por lo siguiente...*

Es importante resaltar que la característica de las diligencias de jurisdicción voluntaria, es la inexistencia de contienda entre partes, por ello, la oposición de parte legítima sólo es admisible durante su trámite y tiene como consecuencia legal su conclusión anticipada, a fin que sea en una instancia diversa (litigiosa) donde se diriman los derechos de las partes.

Esto es, el artículo 880 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, es contundente en señalar que si la oposición se hiciere después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, se desechará tal oposición, reservándose los derechos del opositor.

Ahora bien en el caso en concreto, del presente juicio de jurisdicción voluntaria fue resuelto mediante sentencia definitiva de fecha 05 de agosto de 2022, resolución que causo ejecutoria, según lo proveído de fecha 31 de agosto del mismo año, por lo que SUPONIENDO SIN CONCEDER que la parte opositora tuviera interés jurídico en el presente asunto, al encontrarse concluido, lo conducente era desechar de plano el incidente de oposición, sin perjuicio de que puedan intentar la vía contenciosa que corresponde.

Cobra aplicación la siguiente tesis jurisprudencial...

INFORMACIONES AD PERPETUAM, OPOSICIÓN A LAS...

La cosa juzgada constituye la verdad legal y que por ende, en su contra no cabe admitir recurso ni prueba alguna, porque de aceptarse lo contrario se destruirá la firmeza que corresponde a la sentencia ejecutoriada. De lo que se sigue que en toda controversia jurisdiccional que ha concluido con dicha sentencia, cierra toda posibilidad de procedencia del incidente de nulidad de actuaciones, mientras no se concluya cada periodo procesal, pues no puede destruirse la firmeza que ha adquirido el juicio a través de un simple incidente de naturaleza accesorio al pleito principal.

Véase a mayor abundancia la siguiente tesis jurisprudencial.

NULIDAD DE NOTIFICACIONES, INCIDENTE DE. NO PROCEDE CONTRA ACTUACIONES PRACTICADAS CON ANTERIORIDAD AL DICTADO DE LA SENTENCIA EJECUTORIA..."

ACCIÓN DE NULIDAD POR FRAUDE. PROCEDE EN TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA YA CONCLUIDAS, AUN CUANDO NO ESTÁ REGLAMENTADA ESPECÍFICAMENTE EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACAN..."

QUINTO. [REDACTED], como argumentos de su **APELACIÓN ADHESIVA**, expresó lo siguiente:
Consideraciones.

ÚNICO. Pues bien, los artículos 93, 924 al 928, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, prescriben que la información ad perpetuam es un procedimiento que debe seguirse en jurisdicción voluntaria, en tanto que parte del presupuesto de que no se conoce a persona alguna con mejor derecho para adquirir el inmueble y, por lo tanto, no es necesario que medie juicio alguno; con la importante consideración de que las resoluciones firmes que se dicten en él, pueden alterarse o modificarse cuando cambien las circunstancias que afecten al ejercicio de la solicitud, razón por la cual no constituyen cosa juzgada y, en consecuencia, no son definitivas o privativas:

ART.93..."

ART. 924..."

ART. 925..."

ART. 926..."

ART. 927..."

ART. 928..."

Por lo tanto, si una condición sine qua non del procedimiento de información ad perpetuam consiste en que no se conoce a persona alguna con mejor derecho para adquirir el inmueble respectivo, entonces es lógico concluir que si varia dicha condición, es posible alterar o modificar la declaratoria de propiedad por prescripción, mediante el ejercicio de las acciones judiciales a que haya lugar, que podrán promoverse en la vía incidental, tal como lo dispone el precepto legal 884 del Código de Procedimientos Civiles:

ART. 884..."

Existen numerosas tesis del Alto Tribunal de Poder Judicial de la Federación, en las cuales se deja asentado de manera clara que las diligencias de información ad perpetuam no surten efectos definitivos contra terceros. Sobre este tema, basta con citar las siguientes:

"INFORMACIONES AD PERPETUAM, NO CONSTITUYEN COSA JUZGADA..."

"INFORMACIONES AD PERPETUAM EN JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, NO CONSTITUYEN COSA JUZGADA (LEGISLACIÓN DE COAHUILA)..."

En ese sentido, pese a que en la presente jurisdicción de ad perpetuam había sentencia definitiva, la misma no queda firme por disposición del artículo 93, y por lo tanto, si las circunstancias que le dieron su origen habían cambiado, lo correcto era promover su modificación o revocación o nulidad en la vía incidental, tal como lo hizo la parte actora incidentista y como lo dispone el artículo 884 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, luego entonces, dicho Juzgador era competente para conocer y resolver la solicitud en la forma y vía planteada.

Se dice lo anterior, porque durante el desahogo del procedimiento de esta jurisdicción se ignoraba que los bienes controvertidos tuvieran un propietario, de ahí que éste no fuera llamado en términos del artículo 924 penúltimo párrafo, última parte del Código Procesal Civil, para que tuviera la oportunidad de oponerse y/o defenderse antes del dictado de la sentencia definitiva, por tal motivo y por lo expuesto en la sentencia

recurrida por el Juez, deviene improcedente la excepción de improcedencia de la vía que hizo valer la recurrente al contestar la incidencia planteada.

Además, si bien es cierto que, de conformidad con el artículo 2º del Código de Procedimientos Civiles, la acción procede en juicio aun cuando no se exprese su nombre, con tal de que se determine con claridad la clase de prestación que se exija del demandado y el título o la causa de la acción; también cierto es que, con independencia de la clase de acción o prestaciones que reclamó la actora incidentista, el Tribunal tiene la obligación de tutelar que el desahogo de la presente información ad perpetuam no le cause daño a terceras personas y mucho menos si no han sido llamadas a juicio en términos de ley. En ese sentido, el juzgador advirtió con las documentales que obran en autos que los inmuebles sujetos a esta información, de los cuales los promoventes tenían la intención de prescribir para convertirse en propietarios, que tenían una inscripción registral y un propietario conocido que modificaba las consideraciones previas que se dieron en la sentencia definitiva.

Por lo que, bajo las consideraciones antes expuestas y las vertidas por el juzgador en el fallo definitivo, es procedente declarar la nulidad de todo lo actuado en la presente jurisdicción voluntaria de información ad perpetuam y dejar a salvo los derechos de las partes implicadas para que lo hagan valer en la forma y vía que corresponda.

SEXTO. Síntesis de los agravios de la apelante Codemandada Incidentista [REDACTED].

En el primer motivo de disenso, la apelante refiere lo siguiente:

a).- Que le causa agravio que el A'quo no haya declarado procedente la excepción de improcedencia de la vía, pues debió advertir que la pretensión de su adversaria fue la nulidad de actuaciones por actos fraudulentos realizados en la sustanciación de la Jurisdicción Voluntaria de Información Ad-Perpetuam, y no una simple oposición en su tramitación que se encuentra prevista en el artículo 880 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, ya que su petición la efectuó con posterioridad al dictado de la sentencia que resolvió la Jurisdicción Voluntaria de Información Ad-Perpetuam.

b).- Que si bien conforme el artículo 17 de la Carta Magna, la formalidad procedimental de un juicio en la vía correcta puede obviarse so pretexto que debe privilegiarse la solución del fondo de la litis, no debe soslayarse que tal circunstancia no es irrestricta, virtud a

que conforme al citado numeral, dicha ponderación está condicionada a que no se afecte el derecho de igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos sustantivos; en razón a eso y por existir una sentencia que declaró la procedencia de la jurisdicción voluntaria que había interpuesto, la excepción de improcedencia de la vía que opuso debió haber sido procedente, en virtud que la nulidad interpuesta por su adversaria, se substanció vulnerando el derecho humano del debido proceso y de seguridad jurídica, al haberse substanciado en una vía incorrecta (incidental), cuando lo correcto era que se hubiese tramitado en juicio autónomo. En apoyo cita la jurisprudencia de rubro: ***“PRINCIPIO DE PRIVILEGIO DEL FONDO SOBRE LA FORMA. LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO EN LA VIA INCORRECTA NO ES UN MERO FORMALISMO QUE PUEDA OBVIARSE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 17, PÁRRAFO TERCERO, CONSTITUCIONAL).*** Registro digital 2023791.

c).- Que revocar una sentencia que ha resuelto **una controversia principal**, mediante la sustanciación de un incidente de nulidad de actuaciones fundada en que dentro de la tramitación del juicio existieron actos fraudulentos, viola el principio de cosa juzgada, puesto que el incidente de nulidad de actuaciones debe interponerse antes de que se resuelva la controversia o bien contra actuaciones judiciales emitidas en ejecución de la sentencia; que por esa razón el fallo que resolvió la Jurisdicción Voluntaria de Información Ad-Perpetuam no puede ser revocada mediante una sentencia interlocutoria, en atención a que el incidente de nulidad que ocupa no fue instaurado con anterioridad al pronunciamiento de dicha sentencia y tampoco respecto de actuaciones emitidas para su ejecución, sino que, su modificación o revocación, en respeto al principio de la cosa juzgada, debe substanciarse a través de un juicio autónomo, entre otros, **Juicio Reivindicatorio, Acción de Nulidad de Juicio Concluido por Actos Fraudulentos o Juicio de Garantías**, ya que para ello se requiere de una resolución definitiva y no de una interlocutoria. Se apoya en los criterios siguientes: ***“NULIDAD DE***

ACTUACIONES. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO CONTRA ACTOS POSTERIORES AL DICTADO DE LA SENTENCIA, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO". Registro Digital 178685. **"NULIDAD DE NOTIFICACIONES, INCIDENTE DE. NO PROCEDE CONTRA ACTUACIONES PRACTICADAS CON ANTERIORIDAD AL DICTADO DE LA SENTENCIA EJECUTORIA**". Registro digital 205424. **"COSA JUZGADA, AUTORIDAD DE LA**". Registro digital 363317. **"NULIDAD DE PROCEDIMIENTO O DE ACTUACIÓN**". Y **"NULIDAD DE ACTUACIONES, NOCION DE**".

En el segundo motivo de disconformidad, la impetrante alega lo siguiente:

Que le causa agravio que el Natural haya declarado que la parte actora incidentista acreditó los elementos de su acción incidental de nulidad de actuaciones por actos fraudulentos, ya que contrario a ello con ningún medio de prueba quedó demostrado que la sustanciación de las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria haya sido de manera fraudulenta, ya que se tramitó con las formalidades que prevé la legislación procesal civil local; que en todo caso, lo único que puede existir, es un error por parte de la oficina registral, al haber informado de manera incorrecta que los inmuebles objeto de Información Ad-Perpetuam carecían de inscripción, pero que ello no puede constituir un acto fraudulento. Cita la jurisprudencia de rubro: **"NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO, EN QUE CONSISTE LA ACIÓN DE Y DISPOSICIÓN LEGAL DE LA CUAL DERIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MEXICO)"**.

En el tercer motivo de disenso la apelante aduce lo siguiente:

Que la sentencia interlocutoria de 17 diecisiete de mayo de 2023 dos mil veintitrés, es ilegal e infundada, en virtud que si bien las diligencias de jurisdicción voluntaria admiten la oposición de terceros con interés legítimo, también lo es que dicha oposición únicamente puede realizarse durante su sustanciación, por lo que si conforme al

numeral 880 de la Legislación Procesal Civil Local, el incidente de nulidad que ocupa se hizo valer posterior al dictado de la sentencia ejecutoria, debió haberse desechado, en razón de que fue realizada posterior al haberse efectuado el acto de jurisdicción voluntaria. Se sustenta en la jurisprudencia de rubro: ***“INFORMACIONES AD PERPETUAM, OPOCISION A LAS”***. Registro Digital 344094, así como en la tesis ***“ACCION DE NULIDAD POR FRAUDE. PROCEDE EN TRATANDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE DILIGENCIAS DE JURISDICCION VOLUNTARIA YA CONCLUIDAS, AUN CUANDO NO ESTÁ REGLAMENTADA ESPECIFICAMENTE EN EL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACAN”***. Registro digital 2003457.

SÉPTIMO. Por su parte la actora incidentista [REDACTED] interpone **apelación adhesiva** y en lo medular refiere que las resoluciones emitidas en jurisdicción voluntaria por su naturaleza en cuanto a que en su sustanciación no existe el derecho de contradicción entre partes, no puede constituir una verdad legal y que por ello tampoco pueden causar ejecutoria, por lo que, conforme al artículo 93 del Código Adjetivo Civil vigente en la Entidad, pueden alterarse o modificarse en el momento que cambien las circunstancias que le dan origen, sin que en mérito al diverso 884 de la misma legislación procesal, necesariamente tenga que efectuarse en juicio autónomo, sino que debe substanciarse a través de la vía incidental; que por esa razón la interlocutoria recurrida, es acertada, en razón de haberse emitido respecto de un procedimiento tramitado conforme a las formalidades previstas por el aludido artículo 884, 419 y 420 del invocado Código de Procedimientos Civiles, en relación de una resolución que resolvió una Diligencia de Jurisdicción Voluntaria de Información Ad-Perpetuam promovida por su adversaria y otros, la que por su naturaleza no constituye cosa juzgada. Apoya su manifestación en los criterios emitidos por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros siguientes: ***“INFORMACIONES AD PERPETUAM, NO CONSTITUYEN COSA JUZGADA”*** e ***“INFORMACIONES AD***

PERPETUAM EN JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, NO CONSTITUYEN COSA JUZGADA (LEGISLACIÓN DE COAHUILA”.

OCTAVO. Cuestiones previas al estudio de los agravios.

Quienes resuelven estiman que los motivos de disenso planteados por la codemandada incidentista [REDACTED], por estar vinculados entre sí, se analizarán de manera conjunta, puesto que en lo medular manifiesta que la declaración de nulidad respecto de lo actuado en el principal de Jurisdicción Voluntaria de Información Ad Perpetuam, debió haberse pronunciado mediante la substanciación de un proceso autónomo entre otros, **Juicio Reivindicatorio, Acción de Nulidad de Juicio Concluido por Actos Fraudulentos o Juicio de Garantías**, en la que se pronunciara una resolución definitiva y no mediante un incidente.

Lo anterior encuentra apoyo en el criterio Jurisprudencial sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, consultable en la Décima Época, Fuente Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 2018, registro digital 2011406, que a la letra dice:

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO.-

El artículo 76 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, en vigor al día siguiente, previene que el órgano jurisdiccional que conozca del amparo podrá examinar en su conjunto los conceptos de violación o los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, empero, no impone la obligación a dicho órgano de seguir el orden propuesto por el quejoso o recurrente, sino que la única condición que establece el referido precepto es que no se cambien los hechos de la demanda. Por tanto, el estudio correspondiente puede hacerse de manera individual, conjunta o por grupos, en el propio orden de su exposición o en uno diverso.

NOVENO. Antecedentes.

Antes de abordar el análisis de las disconformidades expuestas por la impetrante, a efectos de tener un panorama de los hechos ocurridos en el presente asunto, se plasman las actuaciones más relevantes:

a).- Mediante escrito receptuado el 22 veintidós de marzo de 2022 dos mil veintidós por la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Civiles y Familiares del distrito judicial de Tuxtla, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED], por derecho propio, promovieron en la vía de Jurisdicción Voluntaria, diligencias de Información Ad-Perpetuam, a efecto que derivado de la del derecho de Prescripción Adquisitiva, de simples poseedores, se les declarara legítimos propietarios del **inmueble** ubicado en [REDACTED], **con superficie total de 2,782.00 metros cuadrados, dos mil setecientos ochenta y dos metros cuadrados**, Clave Catastral [REDACTED] dentro de las siguientes medidas y colindancias: al NORTE mide 38.63 metros y colinda [REDACTED] al SUR mide 39.61 metros y colinda con [REDACTED] al ORIENTE mide 72.91 metros y colinda con propiedad privada y; al PONIENTE mide 72.21 metros y colinda con [REDACTED] y propiedades privadas, así como del **Predio Urbano** ubicado en [REDACTED], **de esta ciudad, con superficie de 621.10 metros cuadrados, seiscientos veintiún metros diez centímetros cuadrados**, Clave Catastral [REDACTED] dentro de las siguientes medidas y colindancias: al NORTE mide 24.67 metros y colinda con propiedad privada, al SUR mide 25.00 metros y colinda con 5ª Norte, al ORIENTE mide 24.86 metros y colinda con [REDACTED] y; al PONIENTE mide 25.07 metros y colinda [REDACTED].

b).- Mediante autos de 23 veintitrés de marzo y 6 seis de abril de la aludida anualidad (2022), la jurisdicción en cita, por cuestión de

turno fue radicada por el Juzgado Segundo Civil del distrito judicial referido, bajo el expediente número [REDACTED], ordenándose la citación de la Fiscal del Ministerio Público adscrita a ese juzgado, del Honorable Ayuntamiento Constitucional de este municipio, y de la ciudadana [REDACTED], en su calidad de colindante, así como la publicación de los edictos.

c).- Desahogado el procedimiento requerido por la legislación instrumental, con fecha 11 once de julio del precitado año (2022), se dictó sentencia, en la que a los promoventes, de simples poseedores fueron declarados en propietarios de los inmuebles previamente descritos.

d).- Mediante proveído de 26 veintiséis de agosto de la multicitada anualidad (2022), se declaró ejecutoriada la referida sentencia.

e).- [REDACTED], en su calidad de albacea de la sucesión de su extinto padre [REDACTED], ante el juez de la causa, en la vía incidental demandó de los ciudadanos [REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED], la nulidad del procedimiento llevado a cabo respecto de la referida Jurisdicción Voluntaria, bajo el argumento de haber existido en su substanciación fraude procesal ya que los inmuebles objeto de prescripción no era cierto que carecieran de matriz registral.

f).- Por auto de 16 dieciséis de febrero de 2023 dos mil veintitrés, se admitió la pretensión de la demandante en la vía incidental, ordenándose dar vista a las citadas demandadas.

g).- Desahogado en todas sus fases el incidente mencionado, el 17 diecisiete de mayo del año que transcurre, se emitió la sentencia

interlocutoria en la que se declara la nulidad de todo lo actuado en la aludida jurisdicción voluntaria.

Esta es la actuación objeto del presente recurso.

DÉCIMO. Análisis de los agravios.

En vista del contexto que antecede, los integrantes de este Órgano Colegiado estiman que los motivos de disconformidad formulados por la aludida apelante [REDACTED], resultan **fundados y aptos para revocar la sentencia interlocutoria recurrida**, por las consideraciones siguientes:

Los artículos 93, 877 y 880 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, establecen lo siguiente:

Artículo 93.- *Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, interdicción, **jurisdicción voluntaria** y las demás que prevengan las leyes, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente.*

Artículo 877.- *La jurisdicción voluntaria comprende todos los actos en que, por disposición de la ley o por solicitud de los interesados, se requiera la intervención del juez sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas.*

Artículo 880.- *Si a la solicitud promovida se opusiere parte legítima, se dará por terminada la jurisdicción voluntaria, dejando a salvo los derechos de las partes para que procedan en la vía contenciosa que corresponda.*

Si la oposición se hiciere por quien no tenga personalidad ni interés para ello, el juez la desechará de plano. Igualmente desechará las oposiciones presentadas después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria, reservando el derecho de opositor.

De lo anterior se colige que la jurisdicción voluntaria comprende todo acto en el que por disposición de la ley o por petición de cualquier interesado se requiera la intervención del juez sin que esté promovida ni se promueva controversia alguna.

Ahora bien, resulta necesario precisar que las informaciones ad perpetuam sólo tienen por objeto acreditar o justificar un derecho en el que no tiene más interés sino la persona que promueve, y por su carácter de actuaciones de jurisdicción voluntaria no pueden tener valor probatorio en cuanto a la posesión, ni como instrumento público, ni como información testimonial; esto, porque su protocolización sólo implica la autenticidad de la información en cuanto a existencia, pero no en lo que respecta a su fondo; de ahí que, sólo deben estimarse como una presunción cuando están debida y oportunamente protocolizadas y registradas.

Lo que lleva a concluir que la información ad perpetuam podrá decretarse cuando únicamente tenga interés el promovente; es decir, es un procedimiento que por su naturaleza jurisdicción voluntaria no resuelve controversias entre partes, ya que el órgano jurisdiccional interviene sólo a solicitud del interesado, por tanto, la resolución que las aprueba no dirime conflicto alguno, en consecuencia, no produce los efectos de cosa juzgada.

Así también que durante su **sustanciación** puede existir oposición tanto por parte legítima como por terceros sin personalidad ni interés o también puede sobrevenir oposición **después de efectuado el acto de jurisdicción voluntaria**, pero que si la oposición deviene de parte legítima **durante su sustanciación**, se dará por concluida y se reservarán los derechos de las partes para que procedan en la vía contenciosa, y que si dicha oposición la efectúa quien no tenga personalidad ni interés para ello, **será desechada de plano, lo mismo ocurrirá cuando la oposición se presente después de haberse efectuado el acto de jurisdicción voluntaria**, debiéndose en este caso, reservar el derecho del opositor.

Asimismo que las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad,

interdicción, **jurisdicción voluntaria** y las demás que prevengan las leyes pueden alterarse y modificarse cuando cambie las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente.

Bajo ese contexto, quienes resuelven estiman que adverso a lo determinado por el A'quo, **la excepción de improcedencia de la vía** opuesta por la impetrante al contestar la demanda incidental, **resulta procedente**.

En primer término por cuanto que es criterio de los Tribunales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ningún Juez puede revocar sus propias determinaciones y en el presente caso, el Juez Segundo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla con la emisión de la sentencia objeto de impugnación, está **revocando** su propia determinación que emitió en la sentencia de 11 once de julio de 2022 dos mil veintidós, en los autos del principal, pues en ella declaró que [REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED], de poseedores se convirtieron en legítimos propietarios por virtud de la prescripción consumada en su favor de los inmuebles siguientes: **el primer** predio urbano ubicado en [REDACTED], con superficie de 2,782.00 metros cuadrados, dos mil setecientos ochenta y dos metros cuadrados, clave catastral [REDACTED] dentro de las siguientes medidas y colindancias: al norte mide 38.63 metros y colinda [REDACTED] **AL SUR** mide 39.61 metros y colinda [REDACTED] **AL ORIENTE** mide 72.91 metros y colinda con propiedad privada, **AL PONIENTE**, mide 72.21 metros y colinda con [REDACTED] y propiedades privadas; **el Segundo** Predio ubicado en [REDACTED], con superficie de 621.10 metros cuadrados, seiscientos veintiún metros diez centímetros cuadrados, Clave catastral [REDACTED], dentro de las siguientes medidas y colindancias: Al NORTE mide 24.67 metros y colinda con propiedad privada, al SUR

mide 25.00 metros y colinda [REDACTED], AL ORIENTE, mide 24.86 metros y colinda con [REDACTED], y al PONIENTE mide 25.07 metros y colinda [REDACTED] ambos en esta ciudad; en tanto que en la resolución objeto de apelación, está dejando sin validez no solo la sustanciación del procedimiento, sino también el aludido fallo constitutivo de derechos en favor de los demandados incidentistas.

Pues aun cuando la aludida sentencia constitutiva de derechos derive de un procedimiento de jurisdicción voluntaria, pese a lo establecido en el aludido artículo 93 del Código Adjetivo Civil del Estado, **no puede quedar sin efecto** ya que constituye un procedimiento concluido que únicamente puede ser revocado mediante la sustanciación de un proceso autónomo como lo sería la acción de nulidad de juicio concluido que debe seguirse en la vía contenciosa debido a que la actora incidentista sustenta los hechos de su demanda incidental en que en la jurisdicción voluntaria de información Ad-Perpetuam de donde emana la resolución declarada nula **existió un fraude procesal y un acto fraudulento** por parte del Delegado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio ya que expidió los certificados en el que hizo constar que los referidos inmuebles carecían de registro de inscripción.

Apoya lo anterior el criterio jurisprudencial sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, consultable en la Novena Época, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, página 1140, registro digital: 186513, de rubro:

“NULIDAD DE JUICIO CONCLUIDO, EN QUÉ CONSISTE LA ACCIÓN DE Y DISPOSICIÓN LEGAL DE LA CUAL DERIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).- No obstante que por regla general no procede la nulidad de un juicio por la tramitación de otro, en atención al principio de cosa juzgada, sin embargo, existe una excepción a esta regla, y lo es: cuando el primer procedimiento

se haya tramitado en forma fraudulenta. A esta pretensión se le denomina acción de nulidad de un juicio concluido, por ser resultado de un proceso fraudulento, y consiste en la falta de verdad por simulación en que incurra quien lo promueva, sólo o con la colusión de los demandados o diversas personas, para instigar o inducir a la autoridad jurisdiccional a actuar en la forma que les interese, en perjuicio de terceros. Ello porque la materia de dicho procedimiento es la violación a la garantía de debido proceso legal, por lo que quien intente la acción sólo debe acreditar: a) El hecho en que funda el acto fraudulento objeto del juicio; y, b) Que le cause un perjuicio la resolución que se toma en tal juicio; por tanto, aunque esta acción de nulidad absoluta no está reglamentada en forma específica en el Estado de México, a falta de disposición expresa es de establecer que válidamente deriva de la aplicación de la regla general contenida en el artículo 8o. del Código Civil del Estado de México, que determina: "Los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público, serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario."

Así como determinación sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, localizable en la Décima Época, Fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, página 1694, registro digital 2003457, que a la letra dice:

“ACCIÓN DE NULIDAD POR FRAUDE. PROCEDE EN TRATÁNDOSE DEL PROCEDIMIENTO DE DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA YA CONCLUIDAS, AUN CUANDO NO ESTÁ REGLAMENTADA ESPECÍFICAMENTE EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN.- Aun cuando la acción de nulidad por fraude en el procedimiento de diligencias de jurisdicción voluntaria ya concluidas, no está reglamentada específicamente en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, a falta de disposición expresa es dable aplicar la regla general contenida en los artículos 32 del citado ordenamiento y 8o., 1389 y 1395 del Código Civil para el Estado, los cuales establecen que la acción procede en juicio aun cuando no se exprese su nombre, con tal de que se determine con claridad cuál es la clase de prestación exigida al demandado y el título o causa de la acción, así como el que los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público, serán nulos, máxime que así lo permite el precepto 12 del propio código sustantivo civil, al señalar que a falta de ley expresa aplicable al caso, la controversia se decidirá a favor del que trate de evitarse perjuicios y no a favor del que pretenda obtener lucro. Además, la acción de nulidad de "juicio concluido" debe entenderse referida a todo procedimiento judicial y no necesariamente a aquel en el que se dirima una controversia entre partes, dado que tanto uno como otro son susceptibles de tramitarse en forma fraudulenta y, como ya se indicó, el citado artículo 8o. establece que "los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público, serán nulos"; de ahí que el juzgador no debe hacer distinción donde la ley no la hace.”

El caso que nos ocupa no encuadra en el ordinal 93 del Código de Procedimientos Civiles vigente para el Estado de Chiapas, que si bien, prevé que las resoluciones dictadas en la jurisdicción voluntaria pueden modificarse y alterarse, lo cierto es que señala que esto puede suceder siempre y cuando cambien las circunstancias que afecten al ejercicio de la acción que se dedujo en el juicio correspondiente, situación que no aconteció en el asunto, pues a la fecha en que se dicta esta sentencia no se conoce la tramitación del juicio correspondiente.

En segundo lugar porque al haberse consumado el acto para el cual se promovió la Jurisdicción Voluntaria (Información Ad-Perpetuam), conforme al citado numeral 880 de la Ley Instrumental Civil Local, la pretensión de la actora incidentista debió haberse desechado y reservársele su derecho de oposición para que la tramitara en la vía contenciosa, ya que aun cuando la sentencia que resolvió la referida Información Ad-Perpetuam no provenga de un procedimiento de esa naturaleza, constituye una resolución que está dando por concluido un procedimiento de jurisdicción voluntaria.

Lo que antecede, esencialmente porque la autoridad que conoció de dichas diligencias no está vinculada a tramitar dicha impugnación, pues considerarlo así implicaría consentir que proceda oponer excepciones y defensas en relación a estas, lo que atentaría en contra de la naturaleza de la información ad perpetuam, pues no se trata de un proceso en el que se dilucide la postura de parte actora y demandada, sino de un trámite cuyo único objeto es exteriorizar en forma solemne un derecho a la petición del interesado.

Por tanto, la parte actora incidentista, al no haber tenido intervención, ni habiendo sido parte en éstas, ya que se sustancian en

vía de jurisdicción voluntaria con la sola intervención de la promovente, es claro que su nulidad puede intentarse bien sea como acción o bien, como excepción en un procedimiento contencioso autónomo, sin que jamás pueda tenerse por consentido un acto procesal por una persona que no fue parte en el procedimiento y menos respecto de informaciones ad perpetuam que siempre se reciben y deciden sin perjuicio de terceros, pero no como un incidente procesal de nulidad de actuaciones.

Lo anterior encuentra sustento en la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Quinta Época, Fuente Semanario Judicial de la Federación, Tomo CIII, página 148, registro digital 344094 misma que es del tenor siguiente:

“INFORMACIONES AD PERPETUAM, OPOSICION A LAS.- *Un tercero puede oponerse a las diligencias de información ad perpetuam practicadas en vía de jurisdicción voluntaria, para que el negocio se vuelva contencioso, cuando dichas diligencias se encuentran en tramitación; pero una vez terminadas estas y dictada la resolución en la que se declara poseedor al promovente, sin perjuicio de tercero de mejor derecho, el propio tercero que se crea con derecho a los bienes que fueron materia de la información, no puede oponerse ya a tales diligencias concluidas, sino que debe ejercitar, en la forma procedente, sus derechos sobre la cosa.”*

Bajo esa premisa, se estima que la sentencia interlocutoria de 17 diecisiete de mayo de 2023 dos mil veintitrés, que declara procedente el incidente de nulidad de Jurisdicción Voluntaria y como consecuencia determina la nulidad de todo lo actuado dentro de la Información Ad-Perpetuam sustanciada en vía de Jurisdicción Voluntaria por las demandadas incidentistas, **es incorrecta**, puesto que además de que el Juez Segundo del Ramo Civil del distrito judicial de Tuxtla, por regla general carece de facultades para **revocar** sus propias determinaciones, la nulidad interpuesta por la actora incidentista, ha sido planteada sobre un procedimiento cumplido en el que el acto para el cual se promovió la Jurisdicción Voluntaria (Información Ad-

Perpetuam) ha sido efectuado y consumado, por lo que su nulidad únicamente puede tener lugar mediante la substanciación de un proceso contencioso autónomo, bien sea como acción o bien, como excepción, como lo sería a través de la acción de nulidad de juicio concluido que debe seguirse en la vía ordinaria, debido a que dicha pretensión se sustenta en la existencia de un fraude procesal y de un acto fraudulento por parte del Delegado del Registro Público de la Propiedad y de Comercio.

Ante el contexto que antecede, en términos del artículo 679 de la multicitada Legislación Adjetiva Civil de la Entidad, este Órgano Colegiado con plenitud de jurisdicción determina que la petición de revocación de la sentencia definitiva de 11 once de julio de 2022 dos mil veintidós emitida en el principal de Jurisdicción Voluntaria (Información Ad-Perpetuan) planteada en la vía incidental por [REDACTED] en su carácter de albacea definitivo de la sucesión de su extinto progenitor [REDACTED], **resulta improcedente**, y por consecuencia, **se absuelve** a los demandados incidentistas de las prestaciones reclamadas, dejándose a salvo los derechos de la actora incidentista para que si a sus intereses conviene los haga valer en la vía y forma correspondiente.

Consecuentemente, de conformidad con el artículo 663 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, se **REVOCA** la sentencia interlocutoria impugnada, en consecuencia, se procede a dictar los resolutivos que deben regir:

---- **PRIMERO.-** Se ha tramitado el **INCIDENTE DE NULIDAD DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA**, promovido por [REDACTED], en su calidad de **albacea Definitivo** de la Sucesión Intestamentaria a bienes del extinto [REDACTED], en contra de [REDACTED] y [REDACTED]; en donde la excepción de improcedencia de la vía opuesta por la codemandada incidentista [REDACTED], **resultó procedente**; en consecuencia.-
---- **SEGUNDO.-** Se absuelve a los demandados de las prestaciones reclamadas.

----TERCERO.- Se dejan a salvo los derechos de la parte actora incidentista, para que los haga valer en la vía contenciosa.-

----CUARTO.- No se hace especial condena en costas en esta instancia.-

----QUINTO.- NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

DÉCIMO PRIMERO. En virtud de lo anterior, infundados deviene los argumentos que se hacen valer en la **apelación adhesiva** formulada por la actora incidentista a efectos de fortalecer las consideraciones que sustentaron la sentencia que se revisa, cuenta habida que la excepción de Improcedencia de la Vía opuesta por los demandados incidentistas ha resultado procedente y el fallo objeto de impugnación ha quedado sin efectos, pues ha sido declarada incorrecta.

Ahora bien, la apelación adhesiva tiene como principal objetivo que las consideraciones vertidas en la sentencia recurrida continúen rigiendo, ya que así lo prevé el artículo 665 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, por lo que con base en lo anterior, la apelante adhesiva expresó en esencia que las resoluciones emitidas en jurisdicción voluntaria por su naturaleza en cuanto a que en su sustanciación no existe el derecho de contradicción entre partes, no puede constituir una verdad legal y que por ello tampoco pueden causar ejecutoria, por lo que, conforme al artículo 93 del Código Adjetivo Civil vigente en la Entidad, pueden alterarse o modificarse en el momento que cambien las circunstancias que le dan origen, sin que en mérito al diverso 884 de la misma legislación procesal, necesariamente tenga que efectuarse en juicio autónomo, sino que debe substanciarse a través de la vía incidental.

Que por esa razón la interlocutoria recurrida, según la apelante adhesiva, es acertada, en razón de haberse emitido respecto de un procedimiento tramitado conforme a las formalidades previstas por el aludido artículo 884, 419 y 420 del invocado Código de

Procedimientos Civiles, en relación de una resolución que resolvió una Diligencia de Jurisdicción Voluntaria de Información Ad-Perpetuam promovida por su adversaria y otros, la que por su naturaleza no constituye cosa juzgada. Apoya su manifestación en los criterios emitidos por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros siguientes: ***“INFORMACIONES AD PERPETUAM, NO CONSTITUYEN COSA JUZGADA”*** e ***“INFORMACIONES AD PERPETUAM EN JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, NO CONSTITUYEN COSA JUZGADA (LEGISLACIÓN DE COAHUILA)”***.

La apelación adhesiva que plantea [REDACTED], deviene infundada, toda vez que, como se dijo con antelación, si la finalidad de la misma es para reforzar el fallo que le había beneficiado, al haberse revocado el mismo, ningún fin acarrea en su beneficio, ante la circunstancia de que la sentencia interlocutoria de 17 diecisiete de mayo de 2023 dos mil veintitrés, que declaró procedente el incidente de nulidad de Jurisdicción Voluntaria y que como consecuencia determinó la nulidad de todo lo actuado dentro de la Información Ad-Perpetuam sustanciada en vía de Jurisdicción Voluntaria por las demandadas incidentistas, se determinó **incorrecta**.

Se dice lo anterior, por cuanto ya se señaló en párrafos diversos, de que el Juez por regla general carece de facultades para **revocar** sus propias determinaciones, y la nulidad interpuesta por la actora incidentista, ha sido planteada sobre un procedimiento cumplido en el que el acto para el cual se promovió la Jurisdicción Voluntaria (Información Ad-Perpetuam) ha sido efectuado y consumado, por lo que su nulidad únicamente puede tener lugar mediante la substanciación de un proceso contencioso autónomo, como acción principal. Circunstancias anteriores por la que se consideran infundados los argumentos vertidos en la apelación adhesiva.

Además, dado que sólo puede hacerla valer por quien venció en el juicio, se obtiene que su interposición no es apta para revocar ni modificar los resolutivos de la sentencia impugnada, sino para robustecer las consideraciones sustentantes del mismo fallo, de lo que se sigue que la finalidad de la apelación adhesiva es, exclusivamente fortalecer los razonamientos sustentados por el juzgador de primera instancia para resolver en la forma que lo hizo; por lo que dada su naturaleza accesoria es improcedente cuando se desestiman los argumentos que sirvieron de base para emitir la sentencia de primera instancia.

Consecuentemente; se,

RESUELVE

PRIMERO. En cumplimiento a la ejecutoria de **26 veintiséis de febrero de 2024 dos mil veinticuatro**, pronunciada por el Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad capital, y al oficio número [REDACTED], de la misma anualidad, relativo al juicio de Amparo Indirecto [REDACTED], promovido por [REDACTED], contra actos de esta Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, **SE DEJA INSUBSISTENTE Y SIN VALOR ALGUNO, LA RESOLUCIÓN DE 24 VEINTICUATRO DE AGOSTO DE 2023 DOS MIL VEINTITRÉS**, emitida por este Tribunal, en el **TOCA 315-C-2C01/2023**, formado con motivo al **RECURSO DE APELACIÓN**, interpuesto por la demandada incidentista, así como el **RECURSO DE APELACIÓN ADHESIVA**, interpuesto por la actora incidentista, en contra de la **sentencia interlocutoria de 17 diecisiete de mayo de 2023 dos mil veintitrés**, dictada en el expediente número [REDACTED], por el Juez Segundo del

Ramo Civil del distrito judicial de Tuxtla, en el INCIDENTE DE NULIDAD DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, promovido por [REDACTED], en calidad de albacea definitivo de la Sucesión Intestamentaria del extinto [REDACTED], en contra de [REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED].

SEGUNDO.- Por los argumentos expuestos a lo largo de este fallo, se **REVOCA** la **SENTENCIA INTERLOCUTORIA** de 17 diecisiete de mayo de 2023 dos mil veintitrés, dictada por el Juez Segundo de Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla, en el expediente número [REDACTED], relativo al INCIDENTE DE NULIDAD DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, promovido por [REDACTED], en calidad de albacea definitivo de la Sucesión Intestamentaria del extinto [REDACTED], en contra de [REDACTED], [REDACTED] y [REDACTED], para quedar en los términos de la parte final del **CONSIDERANDO V QUINTO** de este fallo, declarando la improcedencia del incidente.

TERCERO.- Al revocarse la sentencia recurrida, por lo fundado de los razonamientos de la apelación, se declara infundados los agravios de la **apelación adhesiva** formulada por la actora incidentista, por las circunstancias precisadas en el considerando DÉCIMO PRIMERO, del presente fallo.

CUARTO.- Remítase testimonio certificado de la presente resolución al Juzgado de origen para su conocimiento y efectos legales procedentes; oportunamente archívese el toca como asunto concluido.

QUINTO.- Con testimonio autorizado de la presente resolución, comuníquese al Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios



Federales en el Estado, el cumplimiento que se ha dado a la ejecutoria que ha pronunciado en el **JUICIO DE AMPARO INDIRECTO NÚMERO [REDACTED]**, para su conocimiento y efectos legales conducentes.

SEXTO.- NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.

Así lo resolvieron y firman, por unanimidad de votos la Magistrada **MARÍA ELENA FAVIEL BARRIOS**, titular de la ponencia “A”, los Magistrados **EFRÉN ANTONIO MENESES ESPINOSA** y **EVARISTO BARRIOS ARÉVALO**, titulares de las ponencias “B”, y “C”, respectivamente; quienes integran el pleno de la Segunda Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla del Tribunal Superior de Justicia del Estado, fungiendo como Presidente la primera, como integrante el segundo y ponente el tercero de los nombrados; ante la Licenciada **VANESSA CASTAÑÓN MONTERO**, Secretaria General de Acuerdos, quien da fe.

MAGISTRADA PRESIDENTE

MTRA. MARÍA ELENA FAVIEL BARRIOS

MAGISTRADO

LIC. EFRÉN ANTONIO MENESES ESPINOSA



TOCA 315-C-2C01/2023
EXPEDIENTE 273/2022

38

MAGISTRADO

LIC. EVARISTO BARRIOS ARÉVALO

SECRETARIA GENERAL DE ACUERDOS

LIC. VANESSA CASTAÑÓN MONTERO

M'EBA/L'JArc/mvl.

ELIMINADO: 172 elementos. FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 6, apartado A, fracción II y 16 párrafo segundo de la constitución política de los Estado Unidos Mexicanos; 3 de la Constitución Política del estado libre y Soberano de Chiapas; 100, 106 fracción III, 107 y 116 de la ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6 de la ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 134, 139, y 140 de la ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas; 4 fracción II, 12 y 13 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Chiapas; Séptimo fracción III y Trigésimo Octavo fracciones I y II de los lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas. MOTIVO: se trata de información confidencial concerniente a datos personales identificativos.